

38-O-19

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las once horas y diez minutos del día doce de junio de dos mil veinte.

Por agregados los siguientes informes:

a) Oficio referencia 206331 suscrito por el Jefe del Registro Público de Vehículos, Viceministerio de Transporte, recibido el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, con la documentación que adjunta (fs. 4 y 5).

b) Oficio referencia DIR/ADMON/DPTO/INV suscrito por el Ministro de la Defensa Nacional, recibido el día diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, con la documentación que acompaña (fs. 7 al 14).

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. En el caso particular, la publicación en redes sociales revela que el día tres de abril de dos mil diecinueve, el vehículo placas N 5455 fue observado dejando “muebles y equipo turístico” en un “Hotel Resort”, ubicado en el Kilómetro 84 de la Carretera al Litoral, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.

II. Con los informes y documentación rendidos por el Jefe del Registro Público de Vehículos, Viceministerio de Transporte (fs. 4 y 5); y, el Ministro de la Defensa Nacional (fs. 7 al 14), obtenidos durante la investigación preliminar, se ha determinado que:

i) Según el Reporte de Características del vehículo placas N5455, suscrito por el Jefe del Registro Público de Vehículos del Viceministerio de Transporte, se determina que dicho automotor con estado de alta se encuentra a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional (fs. 4 y 5).

ii) De acuerdo al informe del Ministro de la Defensa Nacional, el vehículo placas N5455 se encuentra asignado al Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada (CATFA), siendo el responsable de dicha unidad el señor Aristides Figueroa Castro; asimismo, establece que dicho automotor fue adquirido el día dos de diciembre de dos mil nueve, mediante la modalidad de compraventa a través del Fondo General, y su finalidad institucional es para transportar en todas las misiones encomendadas en apoyo a los planes del Gobierno Central (fs. 7 y 12).

iii) Según el informe antes relacionado, y certificación de la Hoja de Control de Comisiones y de la Hoja de Control de Consumo de Combustible, el día tres de abril de dos mil diecinueve el vehículo placa N5455 no se utilizó para ningún tipo de comisión, siendo autorizado para realizar comisión el día cinco de abril de ese año (fs. 7, 9 y 11).

iv) Conforme la certificación de la autorización de uso del vehículo placa N5455, se establece que el comandante Aristides Figueroa Castro solicitó y autorizó el uso de dicho vehículo a efecto que el motorista [REDACTED] lo trasladara hacia Hotel

Decamerón, registrando que la hora de salida fue a las veinte horas y la hora de ingreso del vehículo fue registrada a las veintidós horas y cuarenta minutos (f. 10).

v) Consta en el oficio referencia 175 D-IV “Logística”, de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por el señor Aristides Figueroa Castro, que el día cinco de abril de ese año, por motivos de trabajo salió del CATFA hacia el Hotel Decamerón, para incorporarse a su grupo familiar, ya que había sido beneficiado con un paquete familiar proporcionado por esa Cartera de Estado (f. 14).

III. A tenor de lo dispuesto en los artículos 33 inciso 4° de la Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG; 83 inciso final y 84 inciso 1° de su Reglamento recibido el informe correspondiente el Tribunal resolverá si continúa el procedimiento o si archiva las diligencias.

En ese sentido, una vez agotada la investigación preliminar el Tribunal debe decidir si a partir de los elementos obtenidos se determina la existencia de una posible infracción ética y si, por ende decreta la apertura del procedimiento, pues de no ser así, el trámite debe finalizarse.

IV. Sobre la base del hecho informado y la información antes detallada, se procede a analizar el caso tomando como marco básico los principios que informan la ética pública y la teleología de la función primordial del Tribunal de Ética Gubernamental, para luego determinar si el caso sometido a conocimiento es una situación que debe ser resuelta bajo su cobertura normativa:

A. Los principios de necesaria e ineludible observancia en el ámbito de la ética pública como fundamento del ejercicio de la función pública, constituyen pautas de interpretación y formas de comprensión de las normas jurídicas de las cuales son rectores; en este sentido, en el presente caso es necesario realizar una reinterpretación bajo supuestos de hecho como el presente, en observancia de los principios de supremacía del interés público, legalidad y eficacia, regulados en el art. 4 letras a), h) y l) de la LEG.

B. De conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la LEG, el procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal tiene por objeto esencial determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticas reguladas en ella, teniendo potestad sancionadora frente a los responsables de las contravenciones cometidas; sin embargo, lo que se persigue es combatir y erradicar todas aquellas prácticas que atentan contra la debida gestión de los asuntos públicos y que constituyen actos de corrupción dentro de la Administración Pública.

El artículo 3 letra f) de la LEG, define la *corrupción* como “el abuso del cargo y de los bienes públicos, cometidos por servidor público, por acción u omisión, para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero”; el término *abuso* se refiere a un uso *excesivo, injusto o indebido* del cargo y de los bienes públicos con el fin de obtener un beneficio particular.

C. De acuerdo a los anteriores conceptos, queda claro para este Tribunal que todo hecho constitutivo de una conducta contraria a los intereses del Estado por exceso o uso indebido de los bienes o recursos públicos o abuso del cargo, en caso de ser comprobado, ha de merecer la respectiva sanción, en su justa dimensión. Es por ello que, cuando se hace mérito de la potestad sancionadora de la Administración Pública, es menester observar el principio de proporcionalidad como medio de adecuación entre el hecho cuestionable y la consecuencia jurídica del mismo.

En este punto, la Sala de lo Constitucional, en su constante jurisprudencia ha señalado que *el principio de proporcionalidad exige que los medios soberanos utilizados en las intervenciones del Estado en la esfera privada, deben mantener una proporción adecuada a los fines perseguidos.*

Dentro de ese contexto, según la sentencia de inconstitucionalidad 109-2013 de fecha 14-I-2016, “el reconocimiento de la potestad sancionadora administrativa conlleva, de forma paralela, la necesidad de la proporcionalidad de las sanciones administrativas, tanto en el plano de su formulación normativa, como en el de su aplicación por los entes correspondientes”, buscando siempre la congruencia entre la conducta y la sanción y que ésta sea proporcional a la gravedad que comporta el hecho.

En definitiva, se puede indicar que el principio de proporcionalidad implica que para imponer una determinada sanción, ésta debe ser idónea, necesaria y proporcionada en estricto sentido para la consecución de los fines perseguidos. Esto significa realizar un juicio intelectual que permita advertir la idoneidad de los medios empleados para la finalidad que se pretende alcanzar y la necesidad de tales medios; esto es, que se debe elegir la medida menos lesiva para los derechos fundamentales, o lo que es lo mismo, que la medida empleada permita alcanzar el fin perseguido con un sacrificio justo de derechos e intereses del afectado, haciendo un juicio relacional entre el bien jurídico tutelado y el daño que se produciría por el acto o la resolución que se dicte, por lo que, en supuestos como el que se analiza, **ante una afectación mínima del interés general, la Administración deberá abstenerse de crear un daño mayor al administrado a través de la sanción.**

Por tanto, el Tribunal ha de realizar una *ponderación de intereses, a fin de determinar la existencia de una relación razonable o proporcionada de la medida con la importancia del bien jurídico que se persigue proteger.*

V. Respecto del hecho puesto en conocimiento ante esta sede, debe advertirse que de comprobarse la conducta objeto de aviso consistente en el uso del vehículo placas N5455, el día cinco de abril de dos mil diecinueve de las veinte horas a las veintidós horas y cuarenta minutos de ese mismo día, por parte del señor Aristides Figueroa Castro, ello configuraría una situación irregular dentro del ámbito disciplinario de Ministerio de la Defensa Nacional. Y es que si bien la ética pública orienta las acciones humanas dentro de la Administración, y este Tribunal como ente rector, debe detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos

contrarios a la LEG, no puede soslayarse que de conocer todas las conductas antiéticas aisladas y que pueden ser de conocimiento de los regímenes disciplinarios internos de cada institución pública, iría en detrimento de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores que sí comporten actos de corrupción que afecten de manera objetiva el interés público.

En razón de ello, debe precisarse que si bien existe un reconocimiento y compromiso por parte de este Tribunal del cumplimiento de la ética dentro del desempeño de la función pública, no puede dejarse al margen, que existen hechos que como el informado, podrían configurar una adecuación a los supuestos regulados por los artículos 5, 6 y 7 de la LEG; sin embargo, carecen de relevancia objetiva para el interés público, pues no se trata de un tema cuya importancia o trascendencia ética sea indudable hasta el punto de justificar el accionar de este Tribunal por medio del procedimiento administrativo sancionador.

Aunado a lo anterior, debe dimensionarse la importancia de la aplicación del régimen disciplinario por parte de las instituciones estatales, pues éste también deviene en un control de la ética pública *ad intra*, pues existen procedimientos disciplinarios reglados *ad hoc* para conductas irregulares como la de objeto de aviso.

En consecuencia, ante estos supuestos, existe ya una canalización por parte de cada institución pública como mecanismo de control de conducta en el procedimiento disciplinario correspondiente, en tanto “la sanción disciplinaria tiene como fundamento la infracción de los deberes éticos y de aquellos cánones conductuales que intentan preservar el buen funcionamiento de la Administración en relación con el servicio público que se presta” (Sentencia de Inconstitucionalidad 18-2008, de fecha 29-IV-2013). Es innegable entonces que las conductas irregulares realizadas por un servidor público que presta sus servicios profesionales o técnicos para la Administración, expone, compromete, menoscaba o causa detrimento al funcionamiento de la institución a la cual sirve, lo cual debe implicar la respectiva sanción disciplinaria en los términos expuestos.

En este sentido, resulta necesario remarcar que este Tribunal está comprometido con el control de la existencia de hechos contrarios al buen uso de las facultades y de los recursos públicos realizado por los servidores públicos o de quienes administran fondos públicos; sin embargo, existen casos que no alcanzan a afectar proporcionalmente el interés general, dado que se trata de conductas muy puntuales que no logran configurar un exceso en la utilización indebida de bienes públicos o abuso de su cargo, pues no se atribuye una conducta desmedida, orientada a ser definida como corrupción en los términos del artículo 3 letra f) de la LEG; cuyo conocimiento a través de la potestad sancionadora de este Tribunal implicaría un dispendio de los recursos con los que cuenta esta institución, siendo la vía idónea los regímenes de control disciplinario que se encuentran dentro de las instituciones públicas.

VI. Esto no significa que este Tribunal avale el hecho que ha sido denunciado o informado como es el caso, sino reiterar que este ente debe ponerse en marcha para controlar

los actos antiéticos que lesionen proporcionalmente el interés general y que provoquen conductas gravosas que pueden poner en grave peligro el funcionamiento ético de las instituciones.

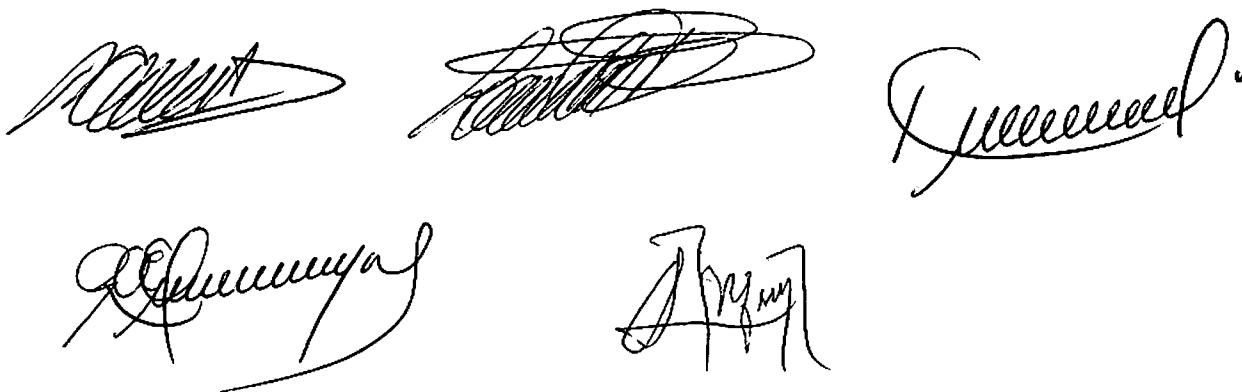
Sin embargo, conductas como la descrita, resultan idóneas de ser controladas a través de la potestad disciplinaria otorgada a cada institución. En el caso particular, existe normativa interna del Ministerio de la Defensa Nacional, que regulan este tipo de faltas.

Por tanto, la declaración de sin lugar la apertura del procedimiento que habrá de pronunciarse, no significa una desprotección a los bienes jurídicos que pudieran verse comprometidos con el hecho informado, sino únicamente que deberá ser el Ministerio de la Defensa Nacional, el que dentro de su potestad disciplinaria podrá adoptar las medidas que considere idóneas, de comprobarse la conducta objeto de aviso, por tratarse de una situación irregular dentro del ámbito disciplinario del Ministerio de la Defensa Nacional.

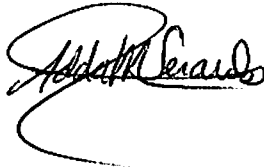
Por tanto, con base en lo dispuesto en los artículos 5 letra a), 33 inciso 4º de la Ley de Ética Gubernamental, 83 inciso final y 84 inciso 1º de su Reglamento, este Tribunal **RESUELVE:**

a) *Sin lugar* la apertura del procedimiento por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución; en consecuencia, *archívese* el expediente.

b) *Comuníquese*, la presente resolución al Ministro de la Defensa Nacional, para los efectos correspondientes.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN



Co2

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública: